Chapter 02 / Capítulo 02

Latin American Memories, Conflicts, and Futurities: Identity, justice, and social change (Spanish Version)
ISBN: 978-9915-704-15-9
DOI: 10.62486/978-9915-704-15-9.Ch02
Pages: 8-16

©2026 The authors. This is an open access chapter distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY) 4.0 License.

From the jungle to the underground: a comparative reading of extraheccionism in Colombia and the Democratic Republic of Congo in the 21st century

De la selva al subsuelo: una lectura comparada del extraheccionismo en Colombia y la República Democrática del Congo en el siglo XXI

Laura Elízabeth Martínez Galindo[1] ✉, Camila Concepción Martínez[1] ✉

[1]Instituto Superior Raúl Roa García, Licenciatura en Relaciones Internacionales, Maestría de Relaciones Internacionales. Cuba.

Autor para la correspondencia: Laura Elízabeth Martínez Galindo ✉

ABSTRACT

This article proposes a comparative analysis of the phenomenon of extra-extraction in Colombia and the Democratic Republic of Congo, exploring how the violent extraction of strategic minerals is linked to co-opted state structures, armed actors, and international markets under the global political economy of contemporary capitalism. Using a critical approach that integrates institutional, social, and geopolitical dimensions, common structural patterns of dispossession, violence, and subordination are identified, which shape a global extractivist regime with direct impacts on conflicts, governance, and territorial dynamics in the Global South.

Keywords: Colombia; Democratic Republic of Congo; Extra-Extraction; Conflict; Mineral Resources.

RESUMEN

Este artículo propone un análisis comparativo del fenómeno de la extrahección en Colombia y la República Democrática del Congo, explorando cómo la extracción violenta de minerales estratégicos se articula con estructuras estatales cooptadas, actores armados y mercados internacionales bajo la economía política global del capitalismo contemporáneo. A partir de un enfoque crítico que integra dimensiones institucionales, sociales y geopolíticas, se identifican patrones estructurales comunes de desposesión, violencia y subordinación, que configuran un régimen extractivista global con impactos directos en los conflictos, la gobernanza y las dinámicas territoriales en el Sur Global.

Palabras clave: Colombia; República Democrática del Congo; Extrahección; Conflicto; Recursos Minerales.

INTRODUCCIÓN

El fenómeno extractivo contemporáneo se encuentra estrechamente vinculado a las transformaciones tecnológicas y a la creciente demanda global de minerales estratégicos como el oro, el coltán y el cobalto. Si bien la pandemia de COVID-19 produjo una contracción temporal, posteriormente se registró una recuperación que reforzó el auge extractivista en el

Sur Global. Este proceso se caracteriza por la intensificación de la explotación de recursos, la ocupación territorial y la emergencia de conflictos socioambientales, lo que plantea la necesidad de analizar no solo las dimensiones económicas, sino también los mecanismos de desposesión y violencia estructural que lo sostienen.

En este marco, la noción de extrahección, desarrollada por Gudynas (2013), adquiere relevancia como categoría analítica, más allá del extractivismo convencional. El término extrahección, derivado del vocablo latino extrahere —compuesto por ex ("fuera") y trahere ("quitar" o "arrastrar hacia sí")—, alude al acto de tomar o arrancar recursos, ya sea de las comunidades o de la naturaleza, mediante prácticas que implican violencia y quiebre de los marcos de derechos. Esta perspectiva se enmarca en tradiciones críticas como la teoría de la acumulación por desposesión de Harvey (2004), permitiendo evidenciar cómo la violencia y la ruptura de marcos legales se constituyen en condiciones necesarias para ciertos emprendimientos extractivos.

Diversos estudios posteriores han aplicado el concepto a distintos contextos latinoamericanos, mostrando su utilidad para comprender procesos donde la extracción material se articula inseparablemente con la vulneración de derechos humanos y ambientales. Asimismo, este enfoque revela cómo el extractivismo contemporáneo responde a estructuras globales de poder que asignan al Sur Global un rol subordinado como proveedor de materias primas, reforzando lógicas coloniales adaptadas al capitalismo neoliberal.

En este sentido, los casos de Colombia y la República Democrática del Congo resultan paradigmáticos, pues comparten la condición de territorios estratégicamente ricos en minerales, pero atravesados por conflictos armados, crisis de gobernanza y procesos históricos de despojo. La investigación plantea la hipótesis de que la extrahección constituye un patrón globalizado de acumulación por desposesión, manifestado en dinámicas locales diferenciadas, pero regido por una racionalidad común orientada a satisfacer las demandas del capital transnacional. Bajo esta premisa, se propone un enfoque cualitativo y comparativo con el objetivo de analizar ambos procesos de extrahección minera, e identificar los patrones estructurales y mecanismos comunes que sustentan la apropiación de recursos en contextos marcados por debilidad estatal, conflicto armado y dependencia económica.

DESARROLLO

Explotación ilegal de recursos minerales en Colombia: conflicto armado, corrupción y limitaciones estatales

Colombia es un país caracterizado por su amplia dotación de recursos naturales y su alta diversidad biológica, siendo el segundo territorio más biodiverso del mundo después de Brasil. Según datos del Ministerio de Energía y Minas (2021), el país cuenta con reservas de carbón suficientes para los próximos 52 años, concentrando el 53 % de las reservas probadas de América Latina y el 0,6 % de las mundiales.

En cuanto al oro, Colombia ocupa el puesto 18 a nivel global y el cuarto en la región sudamericana en términos de producción (Agencia Nacional de Minería, 2023). No obstante, la elevada rentabilidad derivada de la explotación de estos recursos ha convertido al sector en un foco de interés para diversos grupos armados.

Tras la creación del Frente Nacional en 1957 y la exclusión de actores políticos distintos a los partidos tradicionales, emergieron diversos grupos guerrilleros como las FARC-EP y el ELN (1964),

el EPL (1967) y el M-19 (1970). Aunque los acuerdos de paz con las FARC en 2016 desmovilizaron gran parte de sus estructuras, surgieron disidencias como la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central (EMC) y el Frente Comuneros del Sur, además del Clan del Golfo, heredero de las Autodefensas Unidas de Colombia.

A partir de los años ochenta, el auge del narcotráfico en conexión con la demanda estadounidense de marihuana y cocaína fortaleció a estos grupos armados, quienes encontraron en los cultivos ilícitos y en los impuestos sobre su producción y exportación una fuente clave de financiación. Posteriormente, con la intervención de Estados Unidos y la caída en el precio de la coca, las organizaciones armadas se orientaron hacia la explotación ilegal de minerales como oro, carbón, diamantes y esmeraldas, estableciendo mecanismos de control territorial y extorsión en zonas estratégicas. El caso del ELN en el Cesar ilustra esta dinámica: desde finales de los setenta consolidó su presencia en áreas de explotación carbonífera, imponiendo pagos ilegales, atentando contra infraestructuras y limitando la actividad empresarial. El carbón, debido a su rentabilidad, su impacto en las regalías locales y el valor especulativo de la tierra, se convirtió en un objetivo prioritario para estos actores. (Concepción Martínez, 2025)

La explotación minera ilegal se ha constituido en una fuente esencial de financiación para la expansión de estos grupos, tal como lo señaló el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, durante la presentación del informe Situación de Derechos Humanos de la

Población Minera Colombiana (Defensoría del Pueblo, 2024). Se estima que cerca del 60 % del territorio nacional presenta algún tipo de actividad extractiva bajo control de grupos armados (Leal Esper, 2019). De acuerdo con Maristela Svampa (2019), entre 2001 y 2011, aproximadamente el 25 % de los conflictos en el país estuvieron relacionados con el petróleo, el oro y el carbón.

Si bien el marco legal colombiano reconoce como ilícita la explotación minera realizada al margen de la ley, la ubicación remota y de difícil acceso de muchas zonas mineras dificulta la acción estatal, creando vacíos de control que favorecen el negocio ilegal. A ello se suman la extorsión, la apropiación de regalías y la falta de denuncias, motivada en ocasiones por la dependencia económica de las comunidades locales hacia estas actividades. En contextos de ausencia de oportunidades laborales formales, parte de la población se vincula directamente con estos grupos armados.

En el caso del oro, un estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) reveló que en 2019 el 66 % de la explotación de oro de aluvión con maquinaria en tierra se realizaba de forma ilegal, escenario que facilita la intervención de estructuras armadas en esta actividad (Cajiao, 2021). Según datos de la Policía Nacional, 306 municipios en 23 departamentos del país se ven actualmente afectados por esta práctica, lo que representa una disminución del 5 % respecto a 2024 (Pardo, 2025).

La participación de los grupos armados en la minería ilegal de oro en Colombia adopta modalidades directas e indirectas. En la primera, ejercen control territorial, adquieren maquinaria, contratan mano de obra y participan en la comercialización a través de empresas fachada (Cajiao, 2021); en la segunda, se benefician de impuestos y pagos por permitir el ingreso de equipos y la operación de minas, como ocurre con el Clan del Golfo en el Bajo Cauca. Estas prácticas generan graves impactos socioambientales, entre ellos contaminación por mercurio y cianuro, afectación a ecosistemas hídricos, incremento de la criminalidad, trabajo infantil y

explotación sexual, con particular incidencia en comunidades indígenas y afrodescendientes del Chocó, históricamente marginadas.

El fenómeno se ve favorecido por la limitada capacidad del Estado colombiano para regular la actividad minera, la criminalización de la pequeña minería y la persistente vinculación entre explotación aurífera y conflicto armado, incluso después de la desmovilización de las FARC. Desde los gobiernos de Álvaro Uribe (2002–2010) hasta los de Juan Manuel Santos e Iván Duque, se expandió la entrega de títulos mineros, consolidando una relación ambigua entre institucionalidad y economías ilegales (Gallego Castro, 2020). Este fenómeno ha estado acompañado de la criminalización de la pequeña minería y de una persistente relación entre la producción de oro y el conflicto armado.

A esto se suma la corrupción estructural que permea el sector. Al respecto, en un estudio para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, identifica al sector extractivo como el principal foco de corrupción en negocios internacionales, registrando prácticas como sobornos, cohecho, encubrimiento de daños ambientales y tráfico de influencias para otorgar concesiones mineras o petroleras, en detrimento de comunidades indígenas y campesinas.

Frente a esta situación, el gobierno de Gustavo Petro ha denunciado la captura de la política minera por redes criminales y actores económicos, además de impulsar operaciones militares contra estructuras como el Clan del Golfo. Sin embargo, el alcance del problema trasciende lo nacional: la minería ilegal de oro abastece a al menos 11 países, entre ellos Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, China, Suiza e India, a través de rutas aéreas, fluviales y terrestres, vinculadas a redes de contrabando y lavado de activos en compraventas de oro. (Pardo, 2025).

Minerales estratégicos y violencia estructural: el extractivismo en la RDC

La República Democrática del Congo (RDC) alberga una de las mayores concentraciones de recursos minerales del planeta. Se estima que posee el 80 % de las reservas globales de coltán, un mineral crucial para la industria tecnológica, además de aproximadamente 80 millones de toneladas métricas de cobre, lo que lo posiciona como el cuarto país con mayores reservas de este recurso (U.S. Geological Survey, 2025). Asimismo, la RDC lidera la producción mundial de cobalto, concentrando en 2021 alrededor del 74 % del suministro global (Statista, 2023). Esta riqueza mineral se complementa con un vasto potencial hidroeléctrico, tierras cultivables extensas y la segunda selva tropical más grande del mundo. No obstante, esta abundancia coexiste con una crisis persistente de índole social, económica y de seguridad (Ver Ilustración 2).

La historia de la República Democrática del Congo (RDC) revela una paradoja estructural: la persistente articulación entre violencia, fragmentación estatal y extracción de recursos. Desde la apropiación del territorio por Leopoldo II tras la Conferencia de Berlín (1885) y la colonización belga posterior, el país fue sometido a un saqueo sistemático mediante prácticas coloniales violentas que destruyeron las estructuras sociales tradicionales e impusieron divisiones étnicas funcionales al poder colonial. Tras la independencia en 1960, el asesinato de Lumumba y el régimen autoritario de Mobutu, respaldado por Occidente en el marco de la Guerra Fría, consolidaron un modelo de despojo basado en la extracción.

La caída de Mobutu y el genocidio de Ruanda desencadenaron, en la década de 1990, dos guerras que institucionalizaron una economía política del saqueo. La Segunda Guerra del Congo (1998–2003), denominada la “Primera Guerra Mundial Africana”, involucró a actores estatales, grupos armados y corporaciones multinacionales que se beneficiaron del coltán, el oro y otros

minerales estratégicos, transformando la explotación ilegal de recursos en motor de la guerra y profundizando la debilidad estatal.

En la actualidad, la extracción minera en la RDC ocurre bajo condiciones precarias, atravesada por redes informales y sin garantías ambientales, laborales o de derechos humanos, lo que convierte al país en un caso paradigmático de extrahección. Esta situación responde a un proceso fallido de construcción estatal, donde la coexistencia forzada entre identidades étnicas tradicionales y estructuras administrativas coloniales ha sido instrumentalizada por actores internos y externos para mantener la inestabilidad y garantizar el acceso irrestricto a los recursos.

La región oriental, especialmente Kivu Norte y Kivu Sur, concentra la articulación entre la minería, la violencia y la desposesión. Allí, más del 70 % de los minerales se extraen en territorios controlados por grupos armados —entre ellos M23, ADF, FDLR, FNL y Mai Mai— que imponen tributos ilegales con la complicidad de autoridades estatales y de conexiones con redes transnacionales. Informes recientes del Consejo de Seguridad de la ONU (2024) advierten que el M23 consolidó el control sobre Rubaya (Masisi), zona minera de coltán que produce cerca del 15 % del tantalio mundial, y que imponió impuestos que generan ingresos mensuales de alrededor de 300 000 dólares. Esta producción, sin embargo, no figura en las exportaciones oficiales, lo que evidencia un alto nivel de contrabando transfronterizo. En consecuencia, la minería ilegal no solo financia la violencia, sino que también configura formas paralelas de soberanía en el territorio.

Lejos de representar una disfunción del sistema, esta economía de guerra constituye una condición funcional para maximizar beneficios bajo lógicas neoliberales de acumulación. Como plantea Jean Omasombo Tshonda (2013), la perpetuación de la inseguridad responde a una "estrategia de rentabilidad" orientada a impedir la estabilización institucional y preservar el control informal de los recursos por redes ilícitas.

En este escenario, el Estado congoleño ha operado no como un ente regulador, sino como facilitador del modelo extractivista en donde la corrupción estructural es un eje central de este entramado. Por ejemplo, la ONG Global Witness denunció en 2017 que entre 2013 y 2015 se desvió del tesoro público al menos 750 millones de dólares en ingresos del sector extractivo, equivalente a una sexta parte del presupuesto nacional (Global Witness, 2017)

En este contexto, las corporaciones transnacionales —muchas de ellas con sede en China, Canadá, Suiza y Estados Unidos— juegan un rol determinante como beneficiarias de la descomposición institucional. Operan a través de filiales locales o alianzas con élites políticas y militares, facilitando prácticas como la subvaloración de minerales, evasión fiscal y violaciones sistemáticas de derechos laborales. Asimismo, la ausencia de mecanismos efectivos de trazabilidad permite que los recursos minerales extraídos en la RDC se incorporen a las cadenas de suministro globales, alimentando una economía internacional sustentada en el trabajo infantil, la devastación ambiental y formas extremas de explotación laboral.

De acuerdo con (Nzongola-Ntalaja, 2002), la interacción entre actores locales e internacionales ha obstaculizado la conformación de una economía soberana en la República Democrática del Congo, transformando su subsuelo en una "zona de sacrificio" para la acumulación global. Esta dinámica se inscribe en lo que (Mbembe, 2006) conceptualiza como "necropolítica", entendida como un régimen de acumulación en el que la vida, los cuerpos y los territorios son gobernados

mediante la violencia, la precarización y la desposesión. En este marco, tanto el Estado como los grupos armados y las corporaciones transnacionales ejercen un poder que trasciende la muerte física para extenderse a la anulación simbólica y social de poblaciones consideradas prescindibles, consolidando así una lógica estructural de exclusión y deshumanización.

CONCLUSIONES

Patrones comunes de la extrahección en Colombia y la RDC

El análisis comparativo entre Colombia y la República Democrática del Congo revela la existencia de patrones estructurales comunes en torno a la extrahección, como lo son el régimen de apropiación territorial articulado por actores armados, Estados cooptados, mercados internacionales y prácticas de explotación social y ambiental. En ambos casos, los grupos armados no estatales ejercen control sobre territorios estratégicos, generando micro soberanías extractivas que desplazan al Estado en su función reguladora y de garantía de derechos.

La violencia, la corrupción y la cooptación institucional aparecen como elementos constitutivos de este modelo, en el que la concesión de títulos, la flexibilización normativa y la permisividad frente a redes ilícitas consolidan economías extractivas paralelas funcionales al capitalismo global. A nivel transnacional, tanto el oro colombiano como el coltán y el cobalto congoleños se insertan en cadenas de valor internacionales a través de circuitos legales e ilegales, evidenciando que la ilegalidad no excluye la integración al mercado, sino que la potencia al reducir controles y maximizar ganancias.

Este patrón global de acumulación por desposesión muestra que la violencia estructural, la precarización social y la degradación ambiental no constituyen externalidades, sino condiciones inherentes a la gobernanza extractivista. De allí que las políticas públicas deban orientarse al fortalecimiento de la trazabilidad de los minerales estratégicos, la transparencia en los contratos de concesión, la aplicación de sanciones efectivas y la implementación de alternativas de desarrollo que reduzcan la dependencia de las economías ilegales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Agencia Nacional de Minería. (2023). *Determinación de minerales de interés estratégico para Colombia*. https://www.anm.gov.co/sites/default/files/Documento_Determinacio %CC %81n_de_Minerales_Estrate %CC %81gicos.pdf

Cajiao, A. (2021, julio). *¿Cómo se relacionan los grupos armados con la minería de oro? Fundación Ideas para la Paz*. https://ideaspaz.org/publicaciones/opinion/2021-07/como-se-relacionan-los-grupos-armados-con-la-mineria-de-oro

Concepción Martínez, C. (2025). Internacionalización del conflicto en Colombia: el papel de Estados Unidos (2001-2022). *Revista Política Internacional, VII*(2), 56–67. https://doi.org/10.5281/zenodo.15103752

Defensoría del Pueblo. (2024, 7 de febrero). *Minería ilegal es el nuevo "combustible" para la expansión de los grupos armados ilegales*. https://www.defensoria.gov.co/-/miner %C3 %ADa-ilegal-es-el-nuevo-combustible-para-la-expansi %C3 %B3n-de-los-grupos-armados-ilegales

Gallego Castro, J. C. (2020, 30 de enero). *La violencia es más fuerte en los departamentos que producen oro*. Agencia de Prensa IPC. https://hacemosmemoria.org/2020/01/30/

la-violencia-es-mas-fuerte-en-los-departamentos-que-producen-oro/

Global Witness. (2017). *Regime cash machine*. https://globalwitness.org/en/campaigns/oil-gas-and-mining/regimecashmachine/

Gudynas, E. (2013). *Extracciones, extractivismos y extrahecciones: un marco conceptual sobre la apropiación de recursos naturales*. Observatorio del Desarrollo. https://ambiental.net/wp-content/uploads/2015/12/GudynasApropiacionExtractivismoExtrahecc

Leal Esper, Y. E. (2019). Minería ilegal, conflicto armado y vulneración al medio ambiente. *Revista Infométrica, 2*(1), 21–44. https://www.infometrica.org/index.php/ssh/article/view/44/42

Mbembe, A. (2006). Necropolitique. *Raisons Politiques, 21*, 29–60. https://aphuuruguay.wordpress.com/wp-content/uploads/20

Ministerio de Energía y Minas. (2021). *Minería de carbón en Colombia*. https://www.minenergia.gov.co/static/mineriaco/src/document/documento %20carbon.pdf

Naciones Unidas, Consejo de Seguridad. (2024). *Informe final del Grupo de Expertos sobre la República Democrática del Congo (S/2024/432)*. https://main.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1533/panel-of-experts/expertreports

Nzongola-Ntalaja, G. (2002). *The Congo from Leopold to Kabila: A People's History*. Zed Books. https://dokumen.pub/the-congo-from-leopold-to-kabila-a-peoples-history-3rd-impression-2007nbsped-1780329407-9781780329406.html

Omasombo Tshonda, J. (2013). *La Décentralisation. De la Première à la Troisième République (RD Congo). Monographies des provinces de la République démocratique du Congo*. Éditions Le Cri.

Pardo, J. (2025, 2 de enero). Ministerio de Defensa reveló cuáles son los 11 países del mundo a los que llega el oro ilegal colombiano. *Infobae*. https://acortar.link/F19mDx

Statista. (s. f.). *Cobalt-producing countries distribution [Distribución de países productores de cobalto]*. https://www.statista.com/statistics/270446/cobalt-producing-countries-distribution/

Svampa, M. (2019). *Las fronteras del neoextractivismo en América Latina. Conflictos sociambientales, giro ecoterritorial y nuevas dependencias*. CALAS. https://doi.org/10.14361/9783839445266

U.S. Geological Survey. (2025, marzo). *Mineral commodity summaries 2025 (Informe No. 2025; Versión 1.2)*. https://doi.org/10.3133/mcs2025

FINANCIACIÓN

Ninguna.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran que no existe conflicto de intereses.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Conceptualización: Laura Elízabeth Martínez Galindo, Camila Concepción Martínez.

Investigación: Laura Elízabeth Martínez Galindo, Camila Concepción Martínez

Redacción – borrador original: Laura Elízabeth Martínez Galindo, Camila Concepción Martínez.

Redacción – revisión y edición: Laura Elízabeth Martínez Galindo, Camila Concepción Martínez.